



## Sencillas reflexiones sobre el problema agrario y rural en Colombia, tercera parte (de 5)

LA GRAN MENTIRA...

Creado en Jueves, 12 Septiembre 2013 10:26 | Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP |  | 

Todos coincidimos en señalar el problema de la tierra en Colombia, su tenencia y uso desigual, su acumulación en muy pocas manos mediante el despojo violento, como causa fundamental de la confrontación. Se considera que el 1.15 % de la población posee el 52 % de la gran propiedad rural, hecho que hay que superar con urgencia, pues es el problema del latifundio un asunto estructural que está en la génesis del conflicto.

La concentración y despojo de la tierra ha dejado en el último cuarto de siglo alrededor de 6 millones de hectáreas arrebatadas. Algunos autores calculan que pueden ser 8 millones.

Leer Tambien:

[Sencillas reflexiones sobre el problema agrario y rural en Colombia parte 1](#)

[El problema no resuelto...parte 2](#)

En el proceso de distorsión y ocultamiento de la verdad sobre el despojo, la acumulación de tierra, el desplazamiento y la crisis humanitaria que hay en el país, sistemáticamente se pretende desconocer las raíces históricas del asunto y la enorme responsabilidad que le cabe al Estado y a las elites gobernantes en esta tragedia. Se ha optado, entonces por referirse al fenómeno mirándolo solamente en su tramo del último cuarto de siglo y utilizando la expresión los violentos para designar a los autores del despojo y protagonistas de la guerra, obviamente no incluyendo a los organismos armados institucionales en este concepto, cuando son ellos los agentes principales del terror. Por el contrario, se ubica a la guerrilla entre los autores de la desposesión criminal.

Dentro de esta visión recortada y falsa es que se trazan las políticas de restitución, redistribución y formalización, que tiene la aspiración por parte del gobierno de restituir hasta 2014, el monto de 2,5 millones de hectáreas, que son consideradas arrebatadas a campesinos o abandonadas por desplazados.

Así, desde enero del año pasado, la normativa basada en un sondeo realizado por el victimario fundamental que es el Estado ha abierto el proceso de reclamaciones que según se ha dicho lo han acogido alrededor de 26.000 personas, que buscan recuperar casi dos millones de hectáreas. Y se complementa la información-desinformación indicando que según los cálculos oficiales; es decir, los cálculos del victimario principal que es el Estado, el 35%, dicho por la misma boca del Ministro de Agricultura anterior, son predios usurpados por las FARC.

Al tiempo que hace la distorsión y miente, el victimario, el que ha trazado la estrategia de desposesión, evade su responsabilidad histórica, diseña un plan de supuesto "resarcimiento" y solución de un problema en el que los actores problemáticos son otros. Pero en el fondo de su solución, está una edición de despojo legal, de

desarticulación de lo que resta de la pequeña economía rural, utilizando el espejismo de la empresarización a partir de la asociatividad con los inversionistas, en la perspectiva de diseñar un campo sin campesinos, el imperio de las economías de escala.

En un país donde el 32 % de sus 46 millones de habitantes vive en el campo, se ha argumentado, entonces, que esta pequeña economía no tiene perspectivas, no es competitiva y coloca el peso específico del supuesto mal en el estado de improductividad o subproductividad del campo, pasando adrede por alto que, al menos en materia alimentaria, es la gran propiedad la que no ayuda en la resolución del autoabastecimiento, y por el contrario esa llamada economía de baja productividad ha aportado hasta más del 90 % de la solución alimentaria, y que a pesar de su marginación sigue aportando no menos del 60 % de esa solución.

El PNUD ha alertado en sus informes recientes, sobre el estado improductivo de gran parte de las tierras aptas para la agricultura, que totalizan 21,5 millones de hectáreas. De ese total, siendo optimistas solamente están cultivados apenas el 22,7 por ciento, según el estudio que coordinó el profesor Absalón Machado. En ese estudio también se advierte de la desigualdad en el acceso al crédito, del cual se reconoce que el 78,2 por ciento de los empréstitos va a manos de los grandes y medianos productores.

Este asunto, como ya lo expresamos en ocasiones anteriores, no se limita solamente a la población campesina. Los pueblos indígenas que suman más de un centenar y congregan alrededor de millón y medio de compatriotas que se auto-reconocen como tales, y las comunidades afro que viven en las áreas rurales, sufren las mismas dificultades y en su gran mayoría viven por debajo de los índices de pobreza.

La referencia al acceso y uso de la tierra, la restitución, la redistribución y la formalización de la propiedad, las tierras improductivas o en subproductividad, la protección de zonas de reserva campesina, entre otros, son algunos de los tópicos de este problema que no se pueden mirar descontextualizados como tozudamente se pretende cuando se hace una interpretación mutilada del Acuerdo General de la Habana, o cuando se pretende que la participación efectiva del país, solo se puede hacer en un momento que amañadamente se ha dado en llamar tercera etapa o fase de un proceso que por parte de las FARC, claramente se está abordando de manera integral.

Las soluciones no pueden esperar a que culminen las conversaciones, ni con ellas se puede manipular la marcha de la Mesa. El gobierno está en el deber de escuchar el clamor ciudadano e ir trazando políticas que pongan freno a la denunciada depredación de que está siendo objeto el territorio nacional por cuenta de las transnacionales y de las locomotoras del desarrollo. Ojalá el clamor de los desposeídos elevado durante el paro nacional agrario y popular, haga reflexionar al gobierno.